



SOBRE LA FUNCION POLITICA DE LA UNIVERSIDAD

por
**IGNACIO
PEREZ DEL VISO**

EL SOLO enunciado del tema hará pensar, a más de un lector, en el estado de politización de las universidades. Conviene distinguir, por ello, entre **función política** y **politización**. No es fácil determinar, de antemano, la diferencia conceptual entre ambas realidades, pero podemos partir de una descripción en base a imágenes que subyacen, al menos, a determinada concepción.

El término "politización" posee para muchos la virtud evocativa del **desorden** que dificulta el normal desarrollo de las actividades académicas e, incluso, del caos

que las paraliza totalmente culminando en el cierre de las casas de estudio. "Politización" sugiere; además de interferencia en la actividad académica, una cierta dosis de **violencia**, desde las formas más pacíficas, como asambleas, panfleteadas y huelgas pasivas, pasando por las intermedias al estilo de la ocupación de locales o "paro activo", hasta las más extremas, con destrucciones materiales, rehenes, portación de armas y, finalmente, guerrilla urbana, "Cordobazo", "rosariazo" y todo tipo de "provincialazo" revisten características de la forma extrema que

no puede evadir, a la larga, el derramamiento de sangre, sea por su dinámica natural, por la acción incontrolada de individuos, por el desgaste psicológico de la policía o por accidente. Pero nadie pretenderá reducir el cordobazo a un simple hecho de violencia, único en su magnitud.

Al decir "cordobazo" se está apuntando a una diferencia cualitativa, no meramente cuantitativa, con referencia a anteriores hechos de violencia. La resistencia violenta, al margen de la evaluación y apreciación ética, constituyó un efecto concomitante, muy sintomático en cuanto plastifica una ruptura ideológica con un régimen y un sistema, pero efecto no necesario ni exclusivo desde que no hace directamente a la esencia de la cosa. Tampoco se ve que la función política —y no sólo la politización— excluya necesariamente la desorganización académica y la violencia. El intento por defender los más elevados valores morales de la comunidad puede ir acompañado por cualquier tipo de violencia, sea por oposición de sectores internos a la comunidad universitaria o bien por reacción externa, sobre todo gubernamental, conduciendo a la clausura de la institución académica. Con todo, la politización parece encontrarse en una vinculación más íntima con la violencia que la función política.

El marxismo es considerado, en general, como un factor determinante de la politización de nuestras universidades. Esto puede implicar, ante todo, que la universidad no marxizada, de estilo académico clásico, considera como ideal universitario el desarrollo de una actividad eminentemente pensante. Como el marxismo no es (sólo) *Theoria* o interpretación sino *Praxis* o acción, no puede admitir el ideal de "centro pensante"; esto, al menos, el marxismo revolucionario, es decir, en su etapa previa al acceso al poder; logrado éste, se metamorfosea lentamente hacia formas tradicionales, liberales o "burguesas", puesto que el eje de influencia política se ha trasladado a la esfera gubernamental. El partido y el gobierno absorben a los líderes naturales de la etapa revolucionaria. Esto parece ser lo común en los países de Europa oriental; en China, en cambio, el fenómeno de la revolución cultural ha superado nuevamente la concepción de la universidad como tabernáculo del pensamiento para mantenerla en la dialéctica revolucionaria, con la diferencia de que la "función política" —si cabe aquí ese término— no se da tanto en una relación de la universidad hacia la sociedad sino del partido y el gobierno hacia la universidad.

FUNCION POLITICA, "PRESTIGIO" Y AUTONOMIA

Mientras "politización" hace más referencia a conflictos internos por causa de factores externos, "función política" dice **relación hacia afuera** sin necesidad de conmoción interna. Dicha relación podría ser entendida, en primer término, como la mera **influencia** que ejerce toda institución de estudios superiores en el ambiente que la rodea. Una ciudad adviene a la mayoría de edad, adquiere carta de ciudadanía intelectual, desde que cuenta con universidad propia. Esto, como es obvio, puede llevar a un forzamiento de la situación, pretendiendo un status cultural al modo como no pocos individuos creen alcanzarlo con el modelo de coche o la marca de reloj. Apenas se permitieron las privadas, pulularon asociaciones "pro universidad", más henchidas de romanticismo que de medios económicos y posibilidades intelectuales. Era inevitable un control estatal que garantizara el **nivel** académico, es decir lo "formal", como títulos de los profesores, bibliotecas, registros, etc., sin interferir la **libertad** académica que escapa en su esencia, como la libertad religiosa, al control estatal. Los primeros proyectos de reglamentación de la ley de universidades privadas crearon cierta incertidumbre al respecto que, felizmente, se ha ido disipando. No olvidemos la indicación del Concilio Vaticano II, en el sentido de que las universidades católicas, convenientemente distribuidas en todas partes de la tierra, "no sobresalgan por su número sino por su afán de doctrina" (grav. educ. moment., N° 10). De lo contrario no podrían cumplir con la función política hacia la sociedad ni con ninguna función propia de la universidad.

En la línea de la influencia cultural podemos señalar el "**prestigio**" que rodea a ciertas universidades, como una aureola religiosa; una larga tradición y una galería de personajes ilustres que pasaron por sus claustros, constituye el derecho de piso europeo; en Estados Unidos, la nómina de Premios Nobel sustituye eficientemente los méritos ancestrales. Y, en general, la invitación a dictar un curso en determinadas universidades equivale a un espaldarazo cultural; tal sería el caso de latinoamericanos llamados desde Europa. Pero el "prestigio", de por sí, no significa ejercicio de la función política, pudiendo incluso contraponerse. Las universidades-santuarios despiertan la fascinación, se transforman en centros de peregrina-

ción, como París y Bolonia en el siglo XIII. Implican una relación de la sociedad hacia la universidad, una polarización y hasta absorción de la primera por la segunda, cuando función política expresa una relación inversa, una acción sobre la sociedad. Las instituciones-santuario pueden llegar a desvirtuar su propio fin, al culto de la erudición por la erudición, creando una cultura aristocrática desvinculada del pueblo. El "prestigio" es indudablemente una base necesaria para cumplir una función política eficiente, pero puede, al mismo tiempo dopar a la institución en un complejo colectivo narcisista.

La función política es correlativa de la **autonomía**. Las universidades de la edad moderna, nacidas o regidas por la concepción de la monarquía absoluta y el "despotismo ilustrado", estaban incapacitadas para una función política —como institución, no como individuos— desde que carecían, por lo general, de una verdadera autonomía. La dependencia absoluta de los "ministerios" de educación, hasta llegar a la reglamentación minuciosa de los planes de estudio, no les permitía casi otra acción que la encuadrada en las pautas oficiales. Con todo, la liberalidad de ciertos príncipes y el relevante prestigio de algunas universidades, proyectaron a éstas más allá de lo que el sistema permitía. La acción, en estos casos, suele adoptar un carácter de reacción u oposición.

Nuestro país, regido desde la segunda mitad del siglo pasado por un sistema oligárquico-liberal, conservó como heren-

cia la concepción moderna de universidades estatales y bajo control estatal. En la segunda década del presente siglo, junto con la irrupción política de movimientos populares, se produce una ruptura del sistema universitario, pasando del enclaustramiento a la acción, en un proceso que ha politizado marcadamente a las universidades. Es que **la imposibilidad de asumir una función política hace que la universidad, a la larga, se politice**, transformándose en un campo de lucha interna en función de conflictos externos. Es lo que, en forma paliada, está ocurriendo en algunas universidades católicas. Pretendiendo alejarse de la politización, se han aproximado peligrosamente al enclaustramiento académico con acentuación de la formación profesional, en un ambiente de neutralidad y a veces indiferentismo hacia la situación del país. No pudiendo cumplir cabalmente una función política, comienzan a deslizarse nuevamente, a la vuelta del péndulo, hacia la politización. En este punto no es tan importante la magnitud del fenómeno, pequeños incidentes aquí y allá, cuanto la dirección del mismo, que en un momento imprevisible puede capitalizar sectores en orfandad.

Ejemplos de universidades que cumplieron una función política los encontraremos en épocas de verdadera autonomía universitaria, por lo general antes o después de la edad moderna. La desprestigiada edad media ha sido una de las épocas de mayor autonomía y participación de las universidades, a lo cual ya nos

café

INSTANTANEO

LA MORENITA

referimos en otra parte (Cfr.: "Orígenes de la participación estudiantil", Estudios, N° 592, junio 1968, págs. 10-14). No sólo la autonomía sino también la participación constituyen prerequisites de una función política.

EL "MAL EJEMPLO" LATINOAMERICANO

Hasta hace menos de un lustro, cada visitante de los Estados Unidos, interesado en problemas universitarios, regresaba ponderando la seriedad, aplicación, y no politización de los estudiantes de aquel país, aumentando el complejo de inferioridad de los latinoamericanos, incapaces de contar con universidades serias, de alto nivel académico y dedicación a la investigación. En un par de años, en un par de meses, parecen haber tomado otro rumbo: se han "latinoamericanizado" y, al sentir de algunos, autodestruido. Prescindamos aquí del problema de la corrupción estudiantil por uso de drogas y otras yerbas cultivadas en una sociedad de superconsumo, lo cual no es atribuible al mal ejemplo latinoamericano por la sencilla razón de que nuestras sociedades no han alcanzado tal capacidad de consumo. Tomemos, más bien, el fenómeno de la convulsión estudiantil a raíz de la guerra en Vietnam y, más en concreto, con motivo de la invasión de Camboya por fuerzas terrestres norteamericanas (la acción aérea merece un tratamiento diplomático especial). Aquí cabe la pregunta de si esa conmoción, no propiamente estudiantil sino universitaria y no a nivel individual o grupal sino institucional, con la clausura de más de cien establecimientos de enseñanza superior, debe ser interpretada como una politización o como el ejercicio de una función política. En cuanto que el conflicto no es tanto interno cuanto de "relaciones exteriores", tratándose de un enfrentamiento entre las instituciones y el poder político, podría pensarse que se trata más de función política que de politización. Pero esta conclusión no es definitiva, pues podría tratarse de una politización absoluta, institucional, lo cual nos conduce a buscar un criterio más hondo de discernimiento. Podríamos, tal vez, decir que **la politización involucra a la universidad en los conflictos de determinado sistema, mientras que la función política versa sobre los fundamentos y condicionamientos del sistema.**

En el caso de los Estados Unidos, es posible distinguir dos tipos de "pacifismo" estudiantil: uno, el **aislacionista**, que no quiere complicarse la vida con problemas ajenos, otro, el de los **objetores de conciencia** que juzgan inmoral la guerra de

Vietnam; el primero es burgués, el segundo comprometido. El aislacionista se mueve dentro del sistema de las conveniencias políticas; persigue el mismo fin de los sectores militares que defienden la invasión de Camboya como un medio eficiente para poder continuar retirando tropas. Este parece ser el punto de vista del mismo presidente Nixon. Que una universidad se embandere en la discusión política sobre las tácticas posibles y convenientes, parece constituir una politización. Equivaldría a operar como un partido más dentro de la comunidad política. Los contestatarios, en cambio, no cuestionarían tanto determinada política de su gobierno cuanto los fundamentos morales de la política norteamericana en el sudeste asiático.

LA CONCIENCIA COLECTIVA

Función política implica que hay un orden anterior a las reglas de juego político del país, una escala de valores que sostiene y anima la organización de una sociedad. Más allá de las leyes y de la constitución se nos manifiestan **los valores personales y comunitarios**. Quienes divinizan la carta magna, como una especie de santuario jurídico y epifanía de la Patria —entendida ésta en la versión liberal de la concepción romántica de la naturaleza— se oponen o mostrarán reacios a todo cuestionamiento ulterior del sistema, olvidando, incluso, los orígenes históricos de toda carta magna. De modo semejante, quienes se identifiquen con una "Revolución" —no un "cuartelazo"—, sea ésta libertadora, nacional o popular, tendrán por incuestionables los postulados originales del movimiento salvador, expresados en actas institucionales o decretos revolucionarios. El carácter mesiánico de tales cruzadas salvíficas implica, indudablemente, una concepción de la historia, la tradición, la liberación y la justicia, que rebasa todo esquema de lucha política y fraccionamiento partidario. Están ya en juego los valores supremos de la comunidad y, situados en el fundamento, el mutismo, la indiferencia o la neutralidad de una universidad pueden equivaler a su acta de defunción como universidad aunque no como instituciones de especialización o preparación profesional.

Una universidad que se limita a formar abogados en un "respeto" a las leyes como palabra definitiva y horizonte incuestionable del cuestionar humano, es decir, en el respeto a "lo simplemente dado" y no al "deber ser" de lo positivamente dado, y, en general, una universidad que se limita a formar —o, peor

aún, "preparar"— profesionales para satisfacer necesidades ya dadas de la sociedad, se ha reducido a los "valores útiles" de la actividad ciudadana y ha renunciado a su función política que consiste en operar sobre los fundamentos del sistema jurídico y de la organización del obrar humano.

Nuestra constitución, por ejemplo, responde a una determinada filosofía liberal—con concesiones históricas regalistas, como la del perimido patronato— y no siempre al pensamiento cristiano o al de otras religiones o ideologías actualmente representativas. El concepto de soberanía política, para citar un ejemplo, entendida en sentido absoluto en formulaciones casi recientes, no parecía diferir mucho del "ius utendi et abutendi" de la concepción romana del derecho de propiedad. La llamada "guerra civil" de Nigeria—pretendiendo disimular un atroz genocidio— puso de manifiesto hasta donde puede llegar al respecto a la soberanía es manipulada como un "derecho de usar y de abusar" dentro de los sagrados límites territoriales.

La ley que concedió el voto a la mujer supuso una determinada antropología. Lo mismo cabría decir de la pena de muerte—tema omitido, hasta hace muy pocos días, por más de un profesor que lo consideraba obsoleto—, y, en general de toda ley no meramente reglamentaria del movimiento productivo de la actividad humana, sino normativa del comportamiento. Aquí no cabe una interpretación "legalista" de la ley; toda interpretación debe ser esencialmente supra-legalista, es decir, en relación a un orden de valores.

La universidad es el centro de elucidación de la conciencia colectiva. Mientras sólo forme técnicos o profesionales, no ha accedido al nivel superior de la enseñanza. La universidad profesionalista no pasa de ser un caso de especialización del nivel secundario. Esto nos revela por qué es impensable una universidad sin Facultad de Filosofía o su equivalente. Sin ella, el conjunto de carreras no lograrían constituir la "universitas", por más coordinados que estuvieren los planes de estudios con ciclos básicos comunes y departamentos de materias afines. Y si la Facultad de Filosofía se reduce a ser un ente autónomo y, en cierto modo, esotérico, dentro de una especie de federación de Facultades—como ocurre frecuentemente en las macro-universidades de nuestras macrociudades—tampoco podremos hablar de universidad. No se trata tanto del aspecto institucional—contar con una Facultad de Filosofía—sino de la existencia de un centro de re-

flexión que induzca el diálogo interdisciplinar y permita proyectar cada carrera en una visión antropológica y trascendente.

COMUNIDAD Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA

El ejercicio de la función política supone una autonomía fundamental, tema al cual nos hemos referido en otra ocasión [Cfr.: "Participación estudiantil y autonomía universitaria", Estudios, N° 587, Nov. 1967, págs. 12-16]. Pero sería ilusorio e, incluso, carecería de sentido la pretensión de una autonomía absoluta. Toda universidad ha nacido de un determinado movimiento cultural creador o de una necesidad "profesionalista", y encuentra en su origen mismo los condicionamientos estructurales de las cuales no puede evadirse; y si logra, es por acción de otras fuerzas que obrarán, a su vez, como condicionantes.

Para que haya universidad debe darse una comunidad cultural, un "habitat", un esfuerzo conjunto creador que pueda modelar el ser de la sociedad. En ese estar enraizada, encuentra una limitación a su autonomía, pero extrae también de allí su fuerza vital. Representando la culminación de un proceso educativo con dos niveles previos, primario y secundario, gozará de una autonomía relativa a las estructuras preuniversitarias; no pocas veces deberá llenar lagunas de formación general correspondientes al ciclo medio. Y, por último, el status familiar de profesores y estudiantes impondrá condicionamientos al ejercicio de la función política; incluso la reacción estudiantil, en cuanto conflicto generacional, implica un condicionamiento familiar del obrar universitario.

Comunidad universitaria y comunidad política no se distinguen enteramente. La primera viene a ser una dimensión de la segunda. La universidad que se aísla psicológica y estructuralmente—incluso ediliciamente—, que se encastilla en una torre de aristocracia intelectual, se incapacita para el ejercicio de una función política, dado que ésta no se realiza de comunidad a comunidad, de institución-universidad a institución-estado, sino que es un proceso de autoclarificación y reflexión de la comunidad. Lo contrario equivaldría a un proceso de "ilustración", **contraponiendo el pensamiento al sujeto pensante que es el pueblo.**

FUNCION POLITICA DE LAS UNIVERSIDADES CATOLICAS

Es ineludible la pregunta de si una universidad católica posee una función po-

lítica. La mentalidad tradicional, la de los primeros tiempos, concebía a las privadas como gabinetes de estudio que capitalizarían al estudiantado saturado de la politización y desorden de las estatales. Y, por ser católicos, como santuarios inviolables. El sentido de la autoridad, puesto en crisis en las oficiales, debería recuperar su valor al amparo de la autoridad sagrada de la Iglesia. La rebelión dejará de ser una simple indisciplina del estudiantado frente a las autoridades académicas, para quedar estigmatizada —así lo ven o lo vieron algunos— como indocilidad de los fieles ante la autoridad religiosa. La docencia es concebida, en tal caso, como un "apostolado" en el sentido más jerárquico del término, y la universidad católica como un "medio" para que la Iglesia pueda estar presente en el mundo.

Sería injusto y ridículo afirmar que los iniciadores de universidades católicas en nuestro país se movieron por tales móviles y solo por ellos; pero que algo de eso flotaba en el inconsciente colectivo, parece difícil negarlo. Como ya indicamos, el problema consiste en que la huída de la politización, real en tantas universidades, pueda implicar un olvido de la función política. De modo semejante, cuando el gobierno de Onganía, en el primer año de la "Revolución argentina", pretendió "sanear" las universidades estatales, concentró tantas energías en la "despolitización" que las dejó exangües para el ejercicio de la función política. El país conservó las casas de estudio pero quedó desvalido de centros pensantes e influyentes en la realidad nacional.

Por otro lado, al ligar las universidades católicas tan estrechamente a la Iglesia, han venido a sufrir aquéllas la crisis actual de ésta. Deberíamos, por tanto, indagar previamente si la Iglesia, al menos en Argentina, está padeciendo un proceso de politización o iniciando el ejercicio de una función política, o ambas cosas a la vez pero en diferentes niveles, lo cual requeriría ser tratado aparte, y dentro de las nuevas concepciones de la "teología política". De todos modos, **la universidad católica tendrá una función política si la Iglesia la tiene.** En cuanto universidad, debe cumplir una función política; si en cuanto católica no pudiera hacerlo, sería un contrasentido hablar de universidad católica; y al decir "en cuanto católica" nos referimos no solo a la concepción sino también a la dependencia. Y como autonomía y participación son prerequisites del ejercicio de una función política, comprenderemos por qué se ha enfatizado tanto últimamente y en forma urticante el dilema de la autonomía de las universi-

dades católicas en relación a la jerarquía. Si la autonomía es nula, deja de ser universidad para pasar a ser un órgano de apostolado. Si es absoluta, parece inadecuado hablar de "católica". Dentro de tales límites cabe una variedad de tipos cuya experiencia permitirá formular más concretamente diversas posibilidades de autonomía.

Las universidades privadas en nuestro país, en cuanto se las supone o supuso instituciones de una clase que no es precisamente la más necesitada, y que por lo tanto podrían autofinanciarse, quedaron al margen de los subsidios estatales. Al ser aprobada la ley Domingorena, se argumentó en medios parlamentarios que atraerían capitales extranjeros, dentro siempre del mismo supuesto de que nacerían de determinados sectores vinculados o vinculables internacionalmente. La debilidad de tal razonamiento, que entonces pudo convencer a no pocos diputados, es ya irrefutable. El prejuicio, incluso, de que los miles de estudiantes de las privadas pertenecen a una clase social superior al de las estatales, difícilmente resistiría a una estadística, salvo "honrosas" excepciones.

De cualquier modo, las privadas se debaten en un círculo vicioso no pueden ser auténticas universidades sin subsidio estatal, y no llegan los subsidios a instituciones cuya relevancia estratégica para el país no se percibe. A lo más, queda la sensación de que el gobierno estaría dispuesto a prestar una ayuda a determinadas carreras de necesidad urgente para el país. Se fomentaría la especialización y la investigación en determinadas áreas, pero sin percibir lo que significa una universidad y la función política que debe desempeñar hacia la comunidad. Y si la ayuda estatal se canaliza como es previsible para un período inmediato, en forma de subvención a proyectos de investigación, las universidades privadas, para poder subsistir, deberán modificar radicalmente su estructura pasando del sistema de carreras en orden a obtener títulos al de cursos de postgrado e investigación. Todo esto nos muestra cómo, al fallar la autonomía se esfuma la posibilidad de cumplir una función política. De tal inoperancia se pueden seguir dos consecuencias igualmente lamentables: o la politización tradicional, de formas violentas, que escandaliza al sector más conservador, o una politización más disimulada, denunciada por otros sectores, que consiste en un mantenimiento del "orden" como convalidación de un determinado sistema, más allá de los gobiernos que lo apliquen sin lograr evadirse de él. ♦